

LA TRADICION CLASICA DE LA POLITICA Y LA DEMOCRACIA CONTEMPORANEA (*)

BERNARD CRICK

Bernard Crick es biógrafo de Orwell. Ha sido profesor de Teoría e Instituciones Políticas en la London School of Economics y después en la Universidad de Sheffield y en Birbeck College (Londres). Ha dado conferencias en todos los continentes. Retirado de la universidad para dedicar más tiempo a escribir, es autor de *In Defence of Politics*, 1962 (traducida al español), *The Reform of Parliament*, 1964, y otras obras de su especialidad. También ha publicado *Crime, Rape and Gin* y artículos numerosos en *The New Statesman* y otros periódicos y revistas como *The Times Higher Educational Supplement*, en el que dio a luz artículos sobre teatro. Es miembro de la Fabian Society y firmante del documento *Charter 88* en favor de una constitución escrita, una lista de derechos rígida, reforma electoral y gobiernos regionales. Ahora vive en Edimburgo y colabora regularmente en *The Scotsman*.

(*) Conferencia pronunciada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Chile. Se reproduce aquí respetando su oralidad. Traducida por Antonio-Carlos Pereira Menaut.

I. LA TRADICIÓN

Siempre resulta difícil hablar con sencillez, tanto en la ciencia política como en la actividad política, especialmente si ello implica moralizar. Pero en esta conferencia vamos a tratar de recordar las razones básicas de por qué la civilización debería tratar de conservar y cultivar una manera “política” de tratar los problemas por muy desilusionados que estemos de los políticos o de que se nos impida actuar en política. El argumento que voy a desarrollar es que una teoría específicamente política nos da razones para creer que algo así como un “gobierno parlamentario”, “democracia representativa” o “gobierno republicano” será a la larga y en todas partes la forma mejor y más estable de ordenar las instituciones humanas (*).

Antes de continuar conviene advertir que la especulación y el pensamiento políticos no son en absoluto asuntos universales, sino tan específicos como la visión científica de las cosas, y, por cierto, igualmente occidentales en sus orígenes, aunque no en sus aplicaciones, y cada aplicación es diferente. Hasta donde sabemos, la especulación libre sobre lo que se puede hacer por medio de la política no es más antigua

(*) El profesor Crick parte de la base de que hay maneras no políticas de gobernar. “República” y “republicano” no significan aquí opuesto a la monarquía sino democrático, basado en la libertad e igualdad, “político” en el mismo sentido de Crick. Cfr. *In Defence of Politics*, Harmondsworth, 1982, 2.ª ed. (N. del t.).

que los griegos. Platón fue la primera persona conocida que estableció una clara distinción entre lo que se nos ordena como ley y lo que por medio del razonamiento podemos percibir como justo, y argumentó que los hombres pueden construir una comunidad política ideal (como hizo en su diálogo *La República*) o, por lo menos, una comunidad política mejor (como en *Las Leyes*).

¿Cómo sucedió esto? No lo sabemos; pero hay un contraste muy claro entre la especulación de los griegos, que reconocen una variedad de formas de gobierno y de sociedad y creen que los hombres pueden elegir entre ellas, y, por otra parte, la casi universal aceptación de una diferencia de naturaleza entre gobernante y gobernados como parte de un orden divino del mundo o de un determinismo objetivo. En el pensamiento antiguo de India y Persia y en los primeros escritos chinos y japoneses sobre gobierno encontramos muchos prudentes consejos a los gobernantes sobre cómo mantenerse en el poder —usar más espías y menos elefantes e incluso gobernar con justicia y no violar ellos mismos las leyes tradicionales—, así como una cantidad de homilías a los gobernados instándolos a mantenerse en su lugar predestinado y cumplir sus deberes. Sin embargo, no encontramos una especulación sobre cómo ordenar mejor las cosas, ni en las estructuras del gobierno ni tampoco en la propia sociedad. La creencia de que es posible mejorar las cosas por medios políticos no se da por supuesta ni siquiera en la actualidad.

Pero fue Aristóteles quien fundó y modeló el pensamiento político. Cuatro siglos antes del comienzo de la era cristiana, hizo tres afirmaciones básicas y partió de un supuesto muy importante. Las afirmaciones fueron: primera, que el hombre es por naturaleza un animal social: “el hombre que piensa que puede vivir fuera de la polis es una bestia o un dios” (ser autosuficiente es no ser humano); segunda, que las sociedades están compuestas por elementos muy diferentes: él dice que su maestro Platón cometió el error de pensar que una *polis* sin una norma única de rectitud sería inestable, mientras que Aristóteles sostiene que cualquier intento de aplicar una norma única provocaría su destrucción; y tercera, que el mejor gobierno es el mixto: ni monarquía, ni aristocracia, ni únicamente democracia, siendo preferible la democracia a la monarquía y a la aristocracia si no hubiera otra elección, pero mejor que el gobierno de la sola mayoría sería la combinación del principio aristocrático de co-

nocimiento y *auctoritas* con los principios democráticos de consentimiento y poder, o sea, “los muchos eligiendo a los pocos”.

El supuesto del que parte, implícitamente, es que todas las formas de régimen político necesitan justificarse, que no existe el poder desnudo, sin consentimiento racional, y que si no se justifican pueden y deben cambiarse.

La única justificación de la monarquía o gobierno de un hombre es que éste sea perfectamente sabio y bueno, lo cual en la práctica, decía Aristóteles, haría de él un dios, cosa posible pero no probable, ni siquiera entre profesores, políticos, soldados o burócratas. La única justificación de la aristocracia es la sabiduría y la experiencia, pero en la práctica la aristocracia suele degenerar en plutocracia o gobierno de los ricos. La única justificación de la democracia o gobierno de la mayoría es la igualdad, pero para Aristóteles la justificación democrática *per se* es una falacia, “la creencia de que como los hombres son iguales en algunas cosas, son iguales en todas”. Sigue razonando que es mucho mejor unir la *auctoritas* de los pocos con la necesidad de obtener el consentimiento de los muchos. Hacer que la mayoría se sienta implicada en las tareas de gobierno es crear la forma de gobierno más fuerte posible.

Gran parte del pensamiento y de la práctica política de los romanos fue sólo una nota a pie de página de este punto fundamental: *auctoritas in Senatu, potestas in populo*.

Poco agregaron los romanos a las prácticas y descubrimientos de los griegos excepto en dos puntos importantes. El primero: demostraron que las instituciones republicanas o políticas eran posibles en gran escala territorial, mientras que los griegos habían pensado sólo en sociedades pequeñas, en las que las personas se relacionaban *vis á vis*. Segundo, mostraron también que la ciudadanía de una comunidad política podía basarse no sólo en lo étnico, como habían creído los griegos, sino también en la conformidad deliberada con una cultura adquirida, en la fidelidad racional hacia las leyes y el espíritu de la *res publica*.

En otras palabras, tanto la cultura griega como la romana atribuían gran importancia a la política. El superior derecho a la inmortalidad, es decir, a ser eternamente recordado, correspondía a los fundadores, salvadores y reformadores de ciudades. Y Cicerón se hace eco de aquella

afirmación de Aristóteles, que hoy suena tan fantástica, de que la política es la “ciencia maestra”; obviamente, no porque incluya o explique todas las restantes “ciencias”, todas las formas de conocimiento, profesiones, actividades sociales e intereses del grupo, sino porque sólo los procedimientos y decisiones políticas pueden establecer prioridades, dar alguna orientación a las diversas demandas rivales acerca de los siempre escasos recursos de toda sociedad. La economía puede decirnos que el precio de una cosa es aquello de lo cual tenemos que privarnos para obtenerla, pero no nos puede decir si vale la pena pagar dicho precio.

El mundo medieval aportó poco a la tradición política, aparte de añadir a las ideas romanas sobre el derecho las ideas cristianas al respecto. Fueron interminables las disputas acerca de lo que era propiamente materia de ley divina o de ley natural y quién debía decidirlo. Pero lo esencial es que el Cristianismo, bajo casi todas sus formas, enfoques, revisiones y redescubrimientos, ha sido siempre dualista, ha permitido la existencia de un ámbito secular de la razón que constituye el terreno propio de la política y de las ciencias naturales. El propio Cristo dijo enigmáticamente: “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. A pesar de haber dado, a veces, prueba de gran ignorancia, animosidad y soberbia, la Iglesia nunca se empeñó en destruir totalmente la autonomía de la ciencia y de la política, al revés que algunas religiones universales e ideologías modernas. Que exista o no algo más allá del mundo secular de nuestros sentidos es especulación o convicción que nada tiene que ver con la tradición del conocimiento histórico y político.

Para que el conocimiento político se dé, solamente hace falta que exista algún ámbito para las consideraciones puramente seculares, aunque sea dentro de un marco religioso, y que haya cabida para una discusión racional sobre cómo ciertas creencias religiosas o morales pueden ser impuestas a la sociedad, o, si se producen discrepancias, cómo se puede llegar en la práctica a un compromiso, arreglo o reconciliación. Si los hombres han de seguir viviendo juntos, las propias religiones, sean transcendentales o ideológicas, tienen que llegar a acuerdos políticos en el terreno de la conducta humana, aún cuando haya quien se salve o se condene, se perfeccione o se deteriore.

Maquiavelo, aunque los ignorantes dicen que lo hizo, nunca negó las ideas corrientes del bien y del mal, para él ideas cristianas. Al contrario,

él dice que para preservar el estado a veces es necesario ser malvado, pero, al revés que Hegel, no sostiene que las acciones en beneficio del estado sean ya, sólo por eso, acciones buenas en sentido absoluto. Maquiavelo ilumina el dilema moral y político fundamental: la agonía de cometer una mala acción por una buena causa o la agonía, más sutil, de tratar de vivir decente y tranquilamente bajo un régimen malo. No hay nada capaz de garantizar que las consideraciones de supervivencia y las de moralidad no puedan entrar en conflicto en ciertas ocasiones, excepcionales pero muy posibles. Maquiavelo es un gran escritor político principalmente porque nos recuerda cuál suele ser el precio moral del orden. En muchos aspectos, fue un republicano romano convencional, pero puede ser considerado fundador de la ciencia política moderna, o de su estudio, por dos motivos. El reconoció dos formas básicas de gobierno, hasta cierto punto como Aristóteles, si bien las llamó "gobierno del príncipe" y "gobierno republicano", siendo la república una mezcla de aristocracia y democracia porque pensaba que ninguna de ellas por separado podía ser estable.

El problema de Maquiavelo en su gran libro *Discursos* es, en primer lugar, saber en qué circunstancias es mejor el gobierno de príncipe o el republicano, y muestra que hay circunstancias en que la elección es casi imposible, pues una de las dos formas no podría ser creada o no podría sobrevivir sin una voluntad y un esfuerzo fuera de lo común. En segundo lugar: ¿cuál es la mejor forma de combinar los elementos que componen el régimen político para asegurar su supervivencia a largo plazo? Su respuesta es clara: en general, no puede fundarse una república donde no hay tradición, memoria o práctica de vida ciudadana; pero por el contrario, donde tal tradición exista, un principado sólo podría establecerse por medio de una violencia, crueldad y habilidad extraordinarias. Maquiavelo piensa que, por lo general, los principados son de por sí inestables: la mejor forma de crear o reformar un estado es por medio de un príncipe, pero para conseguir que dure mucho tiempo, el poder debe ser compartido y el estado debe convertirse en república. Y en cuanto a la combinación de elementos, intentó un análisis dinámico a partir del pensamiento, un tanto estático, de Aristóteles. Qué inútil —dice— resulta ser un estado que no puede confiar armas a su propio pueblo. La república romana era tan fuerte, afirma, porque deliberadamente asumió los desórdenes e inconvenientes derivados de tener unos representantes po-

pulares, los tribunos, pues sin ellos el pueblo nunca se habría sentido parte del estado, el cual se habría debilitado.

Todo lo que se necesita añadir a la consideración, casi exclusivamente militar, del poder del pueblo por Maquiavelo, es la aparición, durante la revolución industrial, del obrero especializado como nueva clase de persona de la cual dependen el poder y bienestar de los estados. Los estados modernos pueden prescindir de él, pero pagando un precio terrible en debilidad, pobreza o a veces ambas, o bien pueden controlarlo, pero al terrible precio de un constante aumento de controles burocráticos y opresión. Algunos de esos controles son vulnerables a la forma más eficaz de oposición política, que no es un discurso o rebelión abiertos sino, como en toda la Europa del este, una hosca apatía e indiferencia, en vez de mucho trabajo y bien hecho.

Si yo terminara aquí ustedes pensarían que les había aburrido con esta rápida y simple lección histórica o sermón secular. ¿Y si ahora hablamos de nuestro propio tiempo? Mi opinión es, simplemente, que la teoría básica de Aristóteles y Maquiavelo sobre la política y la libertad se ve mucho menos realizada por el capitalismo y el industrialismo modernos que lo que ordinariamente se supone. Tanto los economistas marxistas como los liberales han subestimado los factores políticos y sobreestimado los económicos. Estoy de acuerdo con Hannah Arendt en *The Human Condition* en que Marx y Hayek, en su desconfianza hacia los problemas políticos, son dos caras de la misma moneda. Si la política no puede considerarse separadamente de la economía, ni la economía aparte de la política, es evidente que la distribución de recompensas en una sociedad será, al final, una cuestión política. Y los factores "políticos" son, sencillamente, una mezcla siempre cambiante de intereses económicos y puntos de vista morales. La tarea de la política no es encontrar el mejor, más fuerte o más eficaz interés económico o punto de vista moral, sino mostrar cómo pueden ser combinados o reconducidos a un tipo de competición que discurra dentro de límites aceptables y convencionales.

De acuerdo con la tradición de la teoría política, estoy convencido de que lo que tendríamos que hacer los hombres para lograr un consenso total siempre sería un precio demasiado alto. Y tampoco existen principios organizativos únicos y dominantes, pues si admitimos un principio que dé lugar a la explotación incontrolada de los recursos naturales, como

el de libre empresa o el de soberanía nacional, podríamos estar destruyendo la fertilidad del propio planeta. Y si el principio de igualdad prevaleciera absolutamente sobre el de iniciativa individual, en vez de moderarlo se derrotaría a sí mismo, al destruirlo por completo; y digo esto personalmente como socialdemócrata.

La tradición de libertad política no nos dice que para sobrevivir necesitemos un acuerdo sobre los fines morales, que es el único argumento teórico que algunos políticos parecen utilizar. Por el contrario, necesitamos un acuerdo sólo sobre los procedimientos y los medios, no sobre los objetivos y los fines. Podemos sobrevivir y causarnos menos daño a nosotros mismos y a nuestro hábitat aceptando que hay de hecho una pluralidad de fines morales en el mundo del hombre. El estudioso de la historia y de la política no puede pedirle a la gente que acepte que todos los fines son igualmente buenos, lo cual sería un contrasentido; ahora bien, si razona de manera política afirmará que todos los fines morales deben ser comprendidos, apreciados y tolerados en cierta medida aunque no se los apruebe.

En consecuencia, el conocimiento histórico y político es muy importante porque si hemos de dominar los conflictos es preciso que comprendamos las motivaciones de los contendientes y las condiciones sociales en que se producen. Si, por el contrario, sólo queremos lograr el triunfo de lo que creemos ser lo mejor, necesitaremos únicamente un conocimiento mínimo de los otros puntos de vista, y —como buenos revolucionarios— fuerza, valor y suerte para los aspectos tácticos más concretos. En otras palabras, un conocimiento exacto de las motivaciones políticas y las circunstancias de las demás personas es una condición general para lograr la tolerancia y la paz, y un tal conocimiento normalmente desaconseja las soluciones extremas o por lo menos las hace parecer demasiado arriesgadas.

El conocimiento político es también un moderador interno.

La mayoría de las autocracias modernas han dejado de ser arbitrarias, es decir que sus habitantes pueden descubrir *grosso modo* qué es y qué no es legal, y los gobiernos se someten en medida sorprendente a las normas que heredan o que ellos mismos han dictado. Pero la mayoría de las autocracias modernas aún tienen que ocultar las razones de sus decisiones porque éstas no se toman tras una averiguación general

de los intereses de todos los grupos que forman una sociedad, sino de acuerdo con los intereses de grupos particulares. Pues el sello de una sociedad libre no consiste necesariamente en unos altos niveles de participación de los ciudadanos sino en un conocimiento público de por qué se toman las principales decisiones: para el académico consistirá en la existencia de un historia contemporánea objetiva con acceso a las fuentes de información, y para la gente corriente consistirá en una prensa libre, pluralista y competitiva. La participación sólo puede ser intensa y universal en comunidades políticas del tamaño de las ciudades-estado griegas, lo cual es el sueño de los *communards* y anarquistas. Pero la información puede ser abierta, libre y razonablemente cierta en comunidades políticas de cualquier dimensión. Los problemas de digerir la información resultarán entonces formidables, pero en principio puramente técnicos. Así, el conocimiento político, que de por sí prospera sólo en sociedades relativamente libres, permite deducir que a la larga es más difícil gobernar sociedades grandes y complejas de una forma autocrática que de una forma política.

La tradición política de Occidente es, en cierto sentido, obviamente conservadora porque nos lleva a ver la continuidad existente entre los diversos sistemas sociales, a comprobar que la tradición es a veces más influyente que las ideologías; que el orden y la supervivencia son requisitos previos de la civilización y la vida, y nos hace ser escépticos respecto a la posibilidad de alcanzar la Revolución, es decir, un estado de cosas totalmente nuevo o cualitativamente diferente, en vez de contentarnos con las revoluciones que ocurren en la tecnología, la producción alimenticia, el aumento de la población o la medicina. Pero en otro sentido la tradición política es perpetuamente radical: no ve motivo racional alguno por el cual tengamos que conformarnos con soportar los poderes existentes o los agobios de la pobreza. Un cambio racional es posible; estudiar los factores políticos del cambio social no significa aceptarlos todos por igual, sino simplemente comprobar que será más fácil cambiarlos si uno los conoce mejor (y si desea cambiarlos). Pero en mi opinión las orientaciones reales del cambio social no son tarea propia del historiador ni del filósofo de la política. Son labor específica de los ciudadanos. Pero si no hay ciudadanos o hay muy pocos, como en las autocracias y dictaduras, los académicos toman de hecho cierta importancia política. Aunque no podamos actuar podemos mantener vivas las llamas gemelas de la esperanza y de la crítica. El estudio

de la política es casi el sello de la libertad, aunque nos resulte políticamente más prudente disfrazarnos de historiadores.

II. EL FUTURO DEL GOBIERNO PARLAMENTARIO (**)

¿Qué nos depara el futuro?

En materia de formas de gobierno el mundo moderno no ha demostrado en absoluto la inventiva de que ha dado prueba en la producción industrial y agrícola, la conducción de la guerra, la ciencia y la tecnología. Y si nos fijamos en los componentes de los sistemas políticos, lo que algunos llaman en sentido estricto "instituciones", como los parlamentos, los partidos, las burocracias y los sistemas electorales, igualmente encontramos una gran ausencia de inventiva. En este siglo las únicas ideas originales sobre gobierno han sido los totalitarismos como sistema político, la idea de un control total de la sociedad (aunque después tienden a recaer en algo más parecido a la antigua autocracia), y el partido político, especialmente el partido único entendido como partido que es el único en cada estado y está en todas las instituciones. (Antes de este siglo los partidos no pretendían realmente gobernar sino sólo influir sobre los gobiernos).

Pero aun sin nuevas invenciones y con continuas y altas tasas de cambio social y tecnológico puede lograrse una razonable estabilidad gubernamental simplemente utilizando viejos mecanismos y principios, como el parlamento y el parlamentarismo, para nuevos fines. Los mecanismos y principios, tales como las elecciones o la información al público de por qué se toman las decisiones, a diferencia de los gobiernos secretos de las antiguas autocracias, variarán mucho en cada caso tanto formal como materialmente. El parlamento no es el rival del equipo gobernante en Gran Bretaña sino más bien su condición fundamental; el parlamento apoya, a la vez que limita, a los gobiernos. El sistema de gobierno parlamentario ha sido estable cuando ha sabido combinar un gobierno fuerte con una oposición fuerte. Los gobiernos deben gobernar, pero gobiernan mejor cuando están sujetos al escrutinio y crítica

(**) En esta conferencia "gobierno parlamentario" no se refiere a la forma de gobierno opuesta al presidencialismo sino al gobernar contando con órganos representativos y deliberantes, parlamentos, cortes o congresos. (N. del t.).

que los parlamentos hacen, aunque provengan de los medios de comunicación o del mundo académico. Las teorías políticas deberían considerar los parlamentos modernos no como gobiernos, ni rivales de los gobiernos, sino como sistemas de comunicación que vinculan los gobiernos con los electorados.

La libertad depende del derecho a criticar a los gobiernos, la capacidad de hacerlo y el hacerlo realmente. Y la libertad opera a través de muchas instituciones además del parlamento: en realidad si todo llega a depender del parlamento la libertad se perderá, pero sin él no funcionará bien. Lo decisivo para que haya un régimen libre no es la posibilidad de que un gobierno sea derrocado cada vez que dicta una legislación impopular, sino de que sea derrocado en las urnas y que tenga que concurrir a unas elecciones que serán efectuadas limpiamente. Unas elecciones generales competitivas son tan importantes como el parlamento, y en este punto Schumpeter tenía razón. Los gobiernos se ven moderados tanto porque la gente pueda saber por qué se está tomando una decisión como por los votos formales; temen a la opinión pública a medida que empieza a cristalizar en forma de perspectivas para las siguientes elecciones. Los parlamentos pueden tener en eso gran influencia, mucho mayor de la que comúnmente tienen, o deberían tener, en una legislación determinada.

Por lo tanto los parlamentos deben ser considerados como una parte, necesaria pero no suficiente por sí misma, del gobierno político o republicano. Después de los fracasos de algunos parlamentos en los años 30, y con la total ausencia de instituciones parlamentarias en las vidas de la mayoría de los habitantes del mundo, uno debe ser cuidadoso y no exigir demasiado. Aunque describamos ciertos tipos de regímenes como "gobiernos parlamentarios", debemos recordar que cuando el gobierno cae no hay parlamento que pueda sobrevivir mucho tiempo. Por tanto, debemos convertir la expresión "gobierno parlamentario" en "régimen de gobierno a través del parlamento", porque lo esencial es que exista una gran diferencia entre un gobierno que para mantener su apoyo tiene que discutir su acción en las sesiones públicas de un parlamento y otro que puede guardarse para sí sus razones y proyectos, y a veces hasta sus intenciones fundamentales.

Se observa con creciente frecuencia que los parlamentos no representan una opinión, sino que, según la frase de Samuel Beer, tienen que "movilizar

el consentimiento”, como el partido único en un régimen totalitario. Pero los parlamentos son, por lo general, instrumentos más eficaces para influenciar a la opinión pública, porque en las repúblicas proceden por controversia. Una persona persuadida es más efectiva que una persona obligada, y además los parlamentos pueden advertir a los gobiernos a tiempo si la persuasión fracasa. Tal vez en esos casos, como suele ocurrir, se cambie la legislación y no la gente.

Como los parlamentos están ahora más preocupados por la función de comunicación de doble vía (influenciar a los ciudadanos y ser influenciados por ellos), lo que Bagehot llamaba funciones “expresivas”, “educativas” e “informativas”, más que legislativas, resulta que la representación de otros grupos distintos de los partidos se vuelve más importante. Los partidos siguen siendo la esencia de los regímenes parlamentarios, al mantener cierta consistencia, tanto en las líneas políticas como en los debates, pero tal vez ahora cuenten menos que en el pasado, y los miembros de las legislaturas que representan intereses sectoriales, como *lobbies* comerciales o movimientos de reforma, merecen una atención especial. La función de representación y conciliación de los intereses de los grupos es ahora más abierta, menos disimulada, lo cual es mucho mejor. Algunos escritores de los años 30 como Sidney y Beatrice Webb pensaban incluso que los parlamentos reformados deberían tener una composición profesional o sindical, al menos una de sus partes o cámaras, así como representantes de distritos territoriales. Esto no ha ocurrido formalmente en ninguna parte, pero en la práctica e informalmente sucede en cierta medida en todas partes.

Si se ha renunciado al mito de la supremacía legislativa, lo cual realmente refuerza las instituciones libres, lo mismo debería hacerse con el de la soberanía parlamentaria (***). El parlamento de Europa está en una etapa aún temprana de desarrollo y hasta ahora posee escasos poderes reales que, según las tradiciones francesas o americanas, lo hagan digno de ser llamado asamblea soberana, pero según la tradición inglesa, especialmente remontándonos a sus orígenes feudales, es una asamblea que tiene derecho al debate, que debe ser consultada y cuyas

(***) De acuerdo con el constitucionalismo inglés el parlamento reúne la supremacía legislativa y la soberanía que en otros países se atribuye al estado, al pueblo o a la nación. Por tanto, la referencia del Prof. Crick a la crisis de la soberanía parlamentaria vale para la crisis de la soberanía de nuestros estados. (N. del t.)

actas son publicadas. Por medio de dichos poderes políticos puede producir un efecto totalmente desproporcionado con respecto a sus poderes legales, y por muy débiles que sean la Comisión y el Parlamento europeos, su propia existencia significa que la soberanía parlamentaria en sentido legal ya no existe para los demás parlamentos de la Comunidad Europea. Ciertamente, el Tratado de Roma, el Consejo de Ministros y la Comisión han retirado muchas cosas del control de las legislaturas nacionales, pero en todo caso su soberanía ya venía siendo cada vez más débil como poder real.

Los países europeos se unieron para conseguir resultados que no podían alcanzar por separado, y ojalá que eso pudiera ocurrir en Africa Oriental y Occidental y en otros lugares. En realidad la pérdida de la soberanía formal significa mayor poder real. Confundir la soberanía formal con el poder real y el derecho a ejercerlo es, en realidad, disminuir el auténtico poder político, como descubrió el gobierno británico en la crisis de las Malvinas-Falklands. A medida que el poder pasa de los antiguos estados soberanos a las instituciones europeas se produce también la tendencia a transferir muchas funciones de gobierno a las regiones y entes locales, al igual que en casi todos los países industriales avanzados. El federalismo formal puede o no crecer, pero ciertamente existe un mayor realismo acerca de las diferentes funciones de gobierno: para ciertas cosas la mayoría de los estados nacionales son demasiado pequeños pero para otras son demasiado grandes.

Parece probable que las instituciones representativas y sus actividades aumenten tanto a nivel nacional como supranacional. Los parlamentos nacionales serán los puentes entre los gobiernos locales y regionales y el europeo. Las teorías y prácticas modernas de planificación, tanto económica como política, admiten la necesidad, no la simple conveniencia liberal, de aumentar la participación pública en la planificación. Con algunas excepciones, está surgiendo una nueva red de instituciones representativas que refuerza el gobierno parlamentario aunque reste alguna importancia al parlamento tradicional, el cual aparece ahora como la institución representativa predominante pero ya no omnipotente.

Los poderes tradicionales de los parlamentos, considerados como soberanos, disminuirán, pero si, siendo realistas, los consideramos como parte de un conjunto complejo de instituciones representativas dentro de unas sociedades muy pluralistas, en las que el poder efectivo no podrá encontrarse en un solo punto, las instituciones parlamentarias

en general se verán probablemente reforzadas y no debilitadas. Y la información al público puede adoptar la forma de un gobierno que se ve políticamente obligado por el parlamento y la prensa a divulgar información —quizá sobre sus propios sistemas de seguridad—, lo que no habría hecho en otro caso; o simplemente puede tomar la forma de propaganda del gobierno. Pero las autocracias y totalitarismos modernos no pueden ignorar a las masas, no pueden medrar simplemente sobre su pasividad como las viejas autocracias: necesitan electores leales, elecciones y propaganda, por engañosa que sea, para movilizar a las masas, porque, sencillamente, todas las poblaciones del mundo se preocupan por la posibilidad de un nivel de vida siempre creciente y creen en ella. Ya nadie piensa, como pensó la humanidad durante gran parte de su historia, que el futuro se parecerá al pasado.

Uno de los grandes problemas del presente y futuro de los regímenes parlamentarios es su dimensión y escala. A primera vista existe una clara diferencia entre los que opinan que la eficiencia exige unidades grandes, el mundo de las superpotencias, y aquellos que sólo ven aseguradas la libertad y la justicia en los pequeños grupos: anarquistas, sindicalistas, pluralistas y federalistas. Pero la profecía más probable sobre las tendencias generales en el futuro es que las cosas serán a la vez más grandes y más pequeñas. No parece probable que desaparezcan los gobiernos centrales pero cada vez se entregan más decisiones a los entes locales, sindicatos, industrias y profesiones; decisiones sujetas a un control central final pero cuya iniciativa y forma son locales. Las políticas de vivienda, planificación urbana, educación, bienestar y empleo se volverán cada vez más regionales, con el estado aplicando normas mínimas mediante el control financiero pero permitiendo más y más variaciones en la práctica. Pero al mismo tiempo, y eso reviste la misma importancia, algunas funciones de gobierno que tradicionalmente competían al estado nacional están ahora exigiendo unidades más amplias. En Europa Occidental ya estamos presenciando una gran preocupación por dichas transferencias administrativas, al mismo tiempo que ciertas funciones gubernamentales clave han ido a parar más allá de la competencia de los gobiernos nacionales, y la situación no es demasiado diferente en Europa Oriental. La política exterior, las de defensa, monetarias, industriales y comerciales básicas están controladas supranacionalmente, pero los argumentos en pro de entregar más libertad de decisión a nivel de fábrica son cada vez más fuertes.

Tal vez no sea demasiado arriesgado generalizar aquí diciendo que todos los países grandes del mundo moderno están tratando de resolver los problemas derivados de conciliar orden y progreso económico, es decir, estabilidad e innovación, de las tres formas que siguen. Primera, permitiendo el crecimiento e influencia de la representación de grupos dentro del estado, grupos que están fuera de los partidos formales o de los sistemas parlamentarios y electorales. Segunda, institucionalizando estos grupos de modo que puedan obtener una autonomía relativa, incluso en regímenes monopartidistas, pues ciertamente son herramientas para la movilización industrial, y ya que son más eficaces en este aspecto que el partido (o incluso los partidos), hay que reconocerles alguna libertad, alguna diversidad y, por ende, tolerar algunas dificultades políticas. Tercera, mediante procesos formales o informales de consulta entre el gobierno y esos grupos antes de tomar grandes decisiones.

A los líderes les gusta saber que se les sigue. Porque cada vez se reconoce más que la clase de políticas económicas y sociales necesarias en un estado moderno no pueden ejecutarse, o no tienen éxito, si los obreros especializados y los ejecutivos las aplican sin convicción y, por tanto, "arrastran los pies". Los cambios industriales necesitan ciertas respuestas positivas, y si muchas veces, incluso en regímenes liberales, la política es algo que la gente soporta o acepta, más que responder positivamente a ella, hay sin embargo ciertos límites que el obrero especializado no va a tolerar. La sanción última o la más realista contra un gobierno despótico no siempre es la rebelión sino más bien el trabajo lento, mal hecho e inefectivo, ya se trate del obrero especializado o del gerente con título universitario. Los húngaros, checos y polacos habían ensayado distintas respuestas a la opresión, pero quizá todas ellas fueron demasiado claras y aparecieron como poderes rivales del régimen oficial; sin embargo, desde otra perspectiva, se puede decir que toda Europa oriental, ya antes de los dramáticos cambios de 1989, era un vasto movimiento informal y no planificado de "marcha lenta" que limitaba severamente los poderes de los regímenes.

Es difícil que este tipo de presión, que surge de la dependencia de los gobiernos respecto a los tecnólogos y expertos, pueda lograr resultados democráticos en el sentido convencional de participación política abierta y creciente. Pero sí puede conseguir algo casi igual de importante y que también forma parte de la democracia: un aumento

radical en la eficacia de la comunicación. Parece que lo que básicamente modera a los gobiernos de las sociedades industriales avanzadas y los hace perseguir objetivos populares es, probablemente, lo que sigue: primero, saber que sus decisiones serán conocidas, como fue el caso de la batalla de los siglos XVIII y XIX contra la ineficacia e injusticia de la autocracia arbitraria; segundo, que las razones de sus tomas de decisión serán conocidas, por lo menos por una élite ejecutiva cuya inteligente capacidad es necesaria; tercero, saber que las consecuencias de sus decisiones serán valoradas críticamente y dadas a conocer al público de tal forma que los trabajadores especializados, de quien dependen tanto las civilizaciones capitalistas como las socialistas, puedan ser educados, movilizados e integrados en las élites gobernantes.

III. TEORÍA E INSTITUCIONES

Hay, pues, mucho que decir a favor de la primera teoría general de las comunidades políticas. Aristóteles estableció dos criterios para la estabilidad de la *polis*. El primero es famoso: que los hombres deberían a la vez gobernar y ser gobernados. Pero el segundo es menos conocido: que la comunidad política no debería ser tan grande que la voz del *estentor* (heraldo) no se oyera de punta a punta, o dicho de otro modo pero con el mismo sentido, no tan grande que los ciudadanos no puedan conocerse entre sí. Podría dejarse de lado este segundo criterio, ya que parecería limitar la democracia a grupos pequeños, como la veía Rousseau, pero una parte del moderno *estentor* son la prensa, la radio y la televisión, y por medio de ellos es posible "conocerse entre sí" también entre estados cuyas poblaciones rara vez se encuentran, si es que se encuentran alguna vez. Algunas sociedades pueden pensar que han llegado todo lo lejos que se puede en la exploración de las inferencias de la primera afirmación de Aristóteles, pero pocas han empezado a apreciar la segunda ni a traducirla a las circunstancias de las modernas sociedades de masas y estados industriales.

Así, los parlamentos serán más importantes que nunca, aunque pareciera que sus poderes formales disminuyen. Por sí mismos, dictarán cada vez menos leyes y serán incapaces de frenar a un gobierno eficaz, pero serán el centro de todo el sistema de comunicaciones de la sociedad moderna, el elemento clave en el *feed back* no sólo entre gobernantes y gobernados, sino también entre todo tipo de grupos de interés. Los

partidos seguirán allí, en el parlamento, para inyectar una tendencia o una corriente y para asegurar, entre tantas y tan crecientes diversidades de intereses, alguna línea política consistente, pero serán menos importantes que en la primera mitad del siglo xx. La influencia política de los parlamentos crecerá en la medida que los políticos aprendan y vuelvan a aprender, a través de las duras lecciones de la historia, que los gobiernos más fuertes, los capaces de hacer más —en términos de nuevas políticas sociales dirigidas no sólo a disfrutar de ese poder negativo que frustra el cambio y perpetúa el *statu quo*—, son los que arrastran consigo el apoyo activo del pueblo, como enseñó Maquiavelo; y el más fuerte entre los fuertes será el que reciba tal apoyo voluntaria y espontáneamente, no por la propaganda ni por la restricción de la libertad de elección. Pocos países pueden ahora ocultar a sus habitantes cómo se gobiernan los otros, y ninguno puede evitar que sus élites administrativas y técnicas lo sepan.

Aunque a menudo pueda resultar más fácil gobernar sin parlamentos, a la larga, las repúblicas parlamentarias son más fuertes que las autocracias, debido al poder del pueblo, a su mayor flexibilidad, y a que sus planes sociales y económicos están abiertos a la crítica pública. La Roma republicana, decía Maquiavelo en los *Discursos*, podía haber evitado los constantes tumultos y conflictos entre las clases si hubiera suprimido la función de los tribunos de la plebe. Roma podía haber vivido más tranquila siendo una república meramente aristocrática o senatorial, pero, argumentaba Maquiavelo, habría sido mucho más débil. Con toda seguridad que la gente corriente no se habría enrolado en las legiones si no se sintiera parte de la comunidad política. Hoy en día el futuro de la civilización no gira alrededor del ciudadano-soldado sino de la satisfacción y energía del ciudadano-trabajador industrial. Los rusos, por ejemplo, creen que es más fácil gobernar para el pueblo que dejarlo gobernarse a sí mismo. Cualquier país que compromete su lealtad y sus energías con un sistema político libre se verá agitado por muchas más crisis y conmociones que la Unión Soviética (antes), pero será mucho más fuerte para llevar adelante nuevos programas que necesiten el apoyo popular. No es fácil gobernar por medio de parlamentos o asambleas populares, pero a la larga es la única alternativa al estancamiento burocrático o a la opresión ideológica. Paradójicamente, una de las cosas que pueden desacreditar el sistema son los intentos de gobernar por parte de los propios parlamentos.

* * *

Esta descripción de obviedades puede haber resultado tediosa, pero a veces es necesario hacer que las obviedades adquieran sentido, como dije al principio de *En defensa de la Política*. El intento sociológico de reducir el liberalismo a un producto instrumental de las estructuras capitalistas, incluso en sus formulaciones históricas más sutiles, contiene algunas verdades, pero ha confundido negativamente la tradición republicana con la capitalista, y termina por mezclar lo malo junto con lo bueno, perdiendo así de vista que los argumentos morales en favor del republicanismo preceden a los argumentos teóricos en favor del capitalismo. La teoría del parlamentarismo es una síntesis de las ideas clásicas republicanas con las feudales pluralistas, pero puede ser utilizada y modificada para muchos fines diferentes: precedió al sistema de partidos competitivos y podría suministrar la base institucional para gobiernos sin partido o de un solo partido, y hasta cierto punto así ocurre ya. Ciertamente, las instituciones parlamentarias pueden extenderse a la industria, a la vida laboral, al gobierno local o descentralizado, y de hecho así sucede en cierta medida, con distintas funciones según las circunstancias. No hay razones teóricas para que los parlamentos existentes sientan celos de la democracia extra-parlamentaria, como tampoco la democracia extra-parlamentaria debe ser anti-parlamentaria. Los parlamentos no deben exigir soberanía, sino una mínima primacía de coordinación. Los sindicalistas empiezan atacando el parlamentarismo burgués y terminan recreando una asamblea nacional representativa.

La libertad es materia de relaciones e interacciones sociales, no simplemente de liberación de la personalidad individual. Marcuse y otros seguidores de Rousseau produjeron tanta confusión como los individualistas económicos. La libertad necesita formas institucionales; el hablar de “desinstitucionalización” es anarquismo, o retórica para reemplazar las instituciones malas por otras mejores, pero en este caso los polemistas deberían aclarar las derivaciones prácticas de sus teorías por triviales que sean.

Al final de la jornada, si trabajamos tanto con medios como con fines, con instituciones orientadas hacia mayor libertad, fraternidad e igualdad, ¿qué alternativas existen aparte de los parlamentos o asambleas republicanas? ¿La vaguedad del “movimiento”? ¿O la concreción de un gobierno de un solo partido, probablemente dominado por burócratas? Aunque se tratara de estados nacionales, no sometidos al dominio de

gobiernos extranjeros, y aunque logran elevar el nivel de vida de sus pueblos absoluta y relativamente, ¿podemos realmente creer que tales gobiernos pueden a largo plazo sostenerse sin volver a crear algo parecido a las asambleas libres de la tradición republicana? Maquiavelo fue muy claro en *El Príncipe* al explicar por qué era necesaria una concentración de poder para crear o restaurar un estado, pero con igual claridad plantea en los *Discursos* por qué el poder necesita después difundirse, y por qué los estados deben adoptar instituciones republicanas si pretenden sobrevivir mucho tiempo. Sólo retrayéndose deliberadamente de la política ordinaria como si fuera contaminante pueden los intelectuales sostener la creencia de que los estados de emergencia pueden prolongarse indefinidamente.

El científico teórico y el activista, aunque sean personajes diferentes, seguramente deberían estar dispuestos a diferenciar distintos niveles en la teoría y distintos momentos u oportunidades para la acción. No todas las instituciones e ideas están al servicio de los intereses de cualquier sistema social. La sociología política debería tratar de condiciones, no de causas, y dejar de pretender ser solamente descriptiva. Pero abandonar tal pretensión es reconocer la primacía del vínculo entre la indagación intelectual libre y los valores e instituciones de la política republicana, cosa que, si en toda forma de gobierno tiene al menos un mínimo valor, en el tipo ideal de una república igualitaria-libertaria llega al máximo.